



DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
TRIBUNAL SUPERIOR. SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL
MAGISTRADA PONENTE: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
*"Al servicio de la justicia
y de la paz social"*

A - 200

Procedimiento: Ejecutivo a continuación de proceso de conocimiento.

Accionante: Carlos Enrique Restrepo y otros.

Accionado: Pablo Alexander Peláez Rodríguez.

Radicado Único Nacional: 050883103001-2019-00437-01

Decisión: Confirma

Tema: Incidente de regulación de honorarios ante renuncia del apoderado en el trámite de proceso civil.

Medellín, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Por auto fechado el 6 de octubre del calendario que finaliza, el Juzgado 1o Civil del Circuito de Bello, aceptó la renuncia al poder presentada por el apoderado judicial de la parte actora, doctor Edwin Eulogio Hinestroza De La Ossa, el cual se notificó por estado número 140 del día 7 del mismo mes.

Posteriormente dicho abogado presentó escrito tendiente a obtener la regulación de honorarios profesionales en contra en contra del señor José Leonardo Valencia Flórez, el mismo que fue rechazado de plano mediante auto fechado el día 11 de octubre, por no cumplir los requisitos establecidos por el art. 76 del C.G.P., pues no se trató de una revocatoria sino de renuncia al poder.

LOS RECURSOS INTERPUESTOS Y DECISIÓN DEL HORIZONTAL

Inconforme, el libelista interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, trayendo a colación la sentencia C 1178/2001, caso en el cual la vista fiscal conceptuó en favor de la tesis según la cual no hay problema en que esa regulación pueda intentarla tanto el abogado a quien se le revoca el poder, como el que renuncia. Consideró así el recurrente que el auto atacado viola el derecho al debido proceso, a la igualdad y acceso a la administración de justicia. Debió entonces el señor juez analizar si la gestión realizada por el apoderado debía remunerarse o no.

Previo el traslado de rigor, mediante auto fechado el día 1º de noviembre, el a-quo negó la reposición, a la vez que concedió el recurso vertical, aduciendo para aquello el carácter taxativo de los incidentes conforme al art. 127 del C.G.P., en apoyo de lo cual trae cita de un despacho del Tribunal Superior de Yopal.

Rememoró que conforme al art. 76 ib. es el abogado a quien se le haya revocado el poder quien queda habilitado para promover, dentro de los 30 días siguientes a la notificación del auto que la admite, el incidente de regulación de honorarios, en punto a lo cual cita también providencia de la Corte Suprema de Justicia referida al artículo 69 del C. de P.C., de igual contenido a la disposición del art. 76 del C.G.P.

CONSIDERACIONES PARA RESOLVER LA APELACIÓN.

Sin lugar a dudas, el auto reseñado es apelable por así disponerlo el artículo 321-5 del C.G.P.

Ahora bien, por mandato del artículo 327 ib. *“Solo se tramitarán como incidente los asuntos que la ley expresamente señale; los demás se resolverán de plano....”*, lo que pone de presente el indiscutible carácter taxativo en esta materia. Y es lo cierto que por así disponerlo **expresamente** la ley, en materia de terminación del poder, solo la revocatoria del mandato -expresa o tácita (mediante designación de otro apoderado)- habilita a quien así finaliza su representación para promover, dentro de los 30 días siguientes a la notificación el auto que admite la revocación, el incidente de regulación de honorarios.

Valga advertir que conforme al art. 2º-6 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es de competencia de esa especialidad jurisdiccional el conocimiento de *“ los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive”*, de suerte que la

previsión contenida en el artículo 76 del C.G.P. constituye excepción a esta regla general y con tal carácter debe asumirse, por lo que no resulta posible extenderla a otras situaciones.

Conviene también precisar que si bien la vista fiscal en su intervención ante la Corte Constitucional, con motivo de la demanda de inexecuibilidad que dio lugar a la sentencia C 1178/01, fue de un criterio diferente, la referida sentencia concluyó que los apartes de la norma acusada -que lo fue el artículo 69 del C. de P.C., de igual contenido al art. 76 de la actual codificación- son exequibles, pues la situación en que se encuentran el abogado a quien se le revoca el poder no es la misma del abogado que renuncia, aspecto en el cual motivó:

“Para adelantar el juicio de igualdad propuesto se requiere, previamente, establecer, si, como lo afirma el actor, todos los abogados que concluyen su actividad estando en curso el proceso para el que se les otorgó poder de representación, se encuentran en la misma situación, simplemente, porque todos requieren que el juez regule el monto de los honorarios, a los que tienen derecho por la labor realizada.

Sea lo primero recordar que todos los profesionales del derecho, como los que ejercen otras profesiones, tienen derecho a percibir una remuneración por la labor adelantada, en la forma convenida y, a falta de convenio, según lo disponga la ley y lo evalúen los jueces, pero este derecho, si bien es importante y no puede ser desconocido, no alcanza a ser un criterio válido de diferenciación, tampoco de asimilación, entre la situación del abogado que renuncia al poder estando en curso el proceso que se comprometió a concluir

hasta el fin, con la de aquel a quien se le revocó el poder, porque lo trascendente no es que ambos tengan derecho a percibir honorarios, sino que la revocatoria del poder no demanda la justificación que la renuncia del mismo exige.

Lo anterior porque el profesional del derecho, antes de aceptar la representación que se le otorga está obligado a conocer el asunto y a indagar la postura que pretende asumir su poderdante para aceptar el otorgamiento solo si la comparte, además de que debe tener conciencia de que, en cualquier estado del proceso, su representante puede desapoderarlo, en tanto el poderdante aspira, una vez producida la aceptación, a ser acompañado hasta el final de la litis, salvo convenio en contrario.

No implica lo anterior que la renuncia del poder no se pueda dar, y su revocatoria sí, toda vez que una y otra pueden producirse en cualquier momento del proceso, lo que acontece es que el abogado que renuncia del poder tiene el deber de explicar porque lo hace, en tanto el poderdante que revoca la designación no requiere justificar tal decisión, situación que implica que aunque sea el mismo profesional el que no puede seguir actuando en el juicio, uno y otro se encuentre en distinta situación de hecho, lo que conlleva a la Sala a no adelantar el juicio de igualdad propuesto.

Así las cosas, el abogado que concluye su labor en juicio a causa de la revocatoria del poder, sin perjuicio de los derechos derivados del eventual contrato de gestión, puede solicitarle al juez de la causa que liquide sus honorarios teniendo en cuenta, simplemente, la labor realizada, en tanto el abogado que renuncia, estando el proceso para el que fue designado en curso,

debe acudir a un trámite que le permita, no solo obtener el pago de sus honorarios, sino dejar en claro su lealtad, responsabilidad y probidad profesional.

Y, al parecer de la Corte, la antedicha demostración no puede darse dentro de un trámite, establecido por el Estatuto Procesal Civil para adelantar cuestiones incidentales, porque la renuncia del poder, estando en curso el proceso, es un asunto que, debido a su trascendencia, requiere de las oportunidades que otorgan los procesos en donde hay plena confrontación”.

Por lo expuesto y sin necesidad de mas consideraciones la suscrita magistrada

R E S U E L V E.

Primero: Confirmar el auto de fecha y procedencia indicadas.

Segundo: No imponer costas por falta de causación.

Tercero: Regresen las piezas digitales al juzgado de origen.

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE



PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
MAGISTRADA

Firmado Por:

Piedad Cecilia Velez Gaviria

Magistrada

Sala 002 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1c235894702184d8b8c6454ea45231ee6160bd31a70b6e3cb6838a5a66125b67**

Documento generado en 19/12/2022 04:17:04 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>